

EL 11-S DE LOS INDÍGENAS CRUCEÑOS

En Bolivia la protesta ya no es asunto sólo de pobres sino de los ricos que vienen perdiendo sus privilegios y quieren expresar su racismo de manera violenta. Un caso documenta la coyuntura: la destrucción física de la sede de un movimiento indígena en Santa Cruz, Bolivia, que estuvo marcada de violencia política y racial, hecho que los medios de comunicación excluyeron de sus agendas.

Gisela López Rivas

giselalopezrivas@yahoo.es

Comunicadora social, ha ejercido el periodismo durante 15 años, de los cuales 10 estuvieron dedicados al periodismo impreso y cinco a la televisión y a la radio. Hizo periodismo de investigación y en profundidad, fruto de ello ganó el Premio Nacional de Periodismo el año 2004. Es activista defensora de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos indígenas y de los de la niñez y adolescencia.

El 11 de septiembre de 2008 también fue funesto para el mundo indígena boliviano. En Santa Cruz de la Sierra, las dos sedes principales de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, CIDOB y de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz, CPESC, fueron intervenidas con violencia y su dirigencia fue amedrentada y perseguida. La peor parte de este ataque racial y político se la llevó la CPESC, cuya infraestructura quedó reducida casi a escombros.

Un medio centenar de jóvenes, con los rostros semicubiertos y provistos de palos, ingresaron por la fuerza, violentaron los dos portones de la CPESC, invadieron las oficinas y comenzaron a robar las computadoras mientras un canal de televisión –el único presente– filmaba. Sacaron al patio una parte del mobiliario y lo incendiaron con la papelería de archivos de la organización indígena. En ese momento, el blanco fue la oficina de la unidad de comunicación, donde habían montado un estudio de radio y se guardaban los archivos de video y de audio de más de una década de vida de la CPESC. De ese estudio no quedó nada, y de los archivos muy poco.

“Fue a eso de las 11:30 de la mañana. Estábamos solo un grupo de mujeres en nuestra sede. Los dirigentes hombres habían salido en comisión (trabajo de campo). Intentamos persuadir a quienes comandaban el ataque porque eran nuestros hermanos indígenas. Les pedimos que se detengan y que detengan a los jóvenes y adolescentes con los que entraron. Les preguntábamos cómo ellos, siendo indígenas también, estaban destruyendo y permitiendo que se destruya nuestra organización”, relató Eneida Charupá Arroyo, una mujer chiquitana, responsable de la cartera de Género de la CPESC.

Las testigos que presenciaron el hecho afirman que los adolescentes y jóvenes que ingresaron por la fuerza eran miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), una organización dependiente del Comité Cívico de Santa Cruz, institución que lideraba la movilización que pretendía instaurar la autonomía departamental en este departamento boliviano.

Las cuatro o cinco mujeres indígenas que se encontraban en la CPESC no pudieron hacer nada para defender sus oficinas frente a la violencia. Pero resistieron hasta el final, observando y reflexionando a sus pares, ex líderes indígenas que en esa coyuntura se aliaron al frente político que había dispuesto la “toma” de las instituciones públicas de Santa Cruz para apropiárselas y comenzar así el proceso autonómico de la región. Pero la CPESC no era una institución pública, sino la sede de una organización que aglutinaba a los cinco pueblos indígenas que tiene el departamento de Santa Cruz.

“Yo le grité a don Fernando Chiqueno (un indígena ayoreo) para que haga frenar la violencia. Le dije: ¿cómo va a permitir usted que hagan tanto daño a la CPESC, a su propia casa?”, relató Blesneida Coimbra Roca, una indígena de base que fungía como secretaria de la organización matriz de los pueblos indígenas de Santa Cruz.

Fernando Chiqueno había sido líder de la CPESC en el pasado. Sin embargo, en 2008, era un indígena que, al margen de su organización, se alió de forma personal con el proyecto político que reivindicaba la autonomía departamental en Santa Cruz y no estaba de acuerdo con la demanda de autonomía indígena que propugnaban las organizaciones de indígenas de las que él formó parte en el pasado.

Según los relatos recogidos, un grupo de jóvenes, la mayoría adolescentes, irrumpieron en la CPESC encabezados por unos diez indígenas, ex dirigentes de la CIDOB y de la CPESC, la mayoría expulsados y cuestionados por las organizaciones sociales a las que pertenecían.

El ingreso y la permanencia de este grupo no duró mucho tiempo en la CPESC. Después de destrozar puertas, sustraer algunas computadoras, equipos de la unidad de comunicación, y quemar archivos entre documentos y cintas de audiovisuales y magnetofónicos, abandonaron el lugar. Todo quedó desolado.

De acuerdo con el relato de las testigos, ellas llamaron a la Policía para que acuda al auxilio y frene la violencia. Sin embargo, a pesar de la insistencia y de la espera, los uniformados no llegaron. “Primero nos dijeron que no podían venir y después, algunos policías fueron sinceros y nos explicaron que no iban a venir porque no querían meterse y que también estaba en riesgo sus vidas y sus trabajos”, contó Charupá.

Las mujeres indígenas que habían presenciado los destrozos se replegaron cuando estaba a punto de caer la noche y resultaba peligroso permanecer en el lugar. A menos de una cuadra, la CIDOB, la sede matriz que aglutina a 34 de los 36 pueblos indígenas que tiene Bolivia, estaba en manos de estos mismos grupos que habían decidido apropiársela.

En pleno anochecer, algunos dirigentes de la CPESC se armaron de valor e ingresaron a rescatar algunas de sus pertenencias, entre equipos y alimentos que tenían en la despensa de sus oficinas. La decisión fue acertada, porque en las siguientes horas el saqueo y la destrucción fueron contundentes.

Lázaro Tacoo, un chiquitano que era el secretario de Fortalecimiento Organizativo de la CPESC en 2008 y que se encontraba desplazado en trabajo de comisión en las comunidades, arribó a la ciudad el mismo 11 de septiembre al final de la tarde. Lo primero que hizo fue intentar comunicarse con las dirigentes mujeres que se habían quedado custodiando la sede indígena. “Cuando yo quise comunicarme con mis hermanas dirigentes, encendí mi celular al llegar a la ciudad y ahí tenía un mensaje que me decía: declárese en la clandestinidad. Era un mensaje anónimo. Fue escalofriante”, rememoró Tacoo. “Recuerdo que sólo habían quedado las mujeres en la CPESC. Por eso cuando llegué nos organizamos con los dirigentes hombres para intentar recuperar nuestras cosas, pero ya estaba casi todo robado. De todas maneras hicimos un operativo para rescatar lo poco que dejaron. Yo estuve de vigilante, tenía

que informar si es que había peligro de que los ataquen a mis hermanos que estaban sacando nuestras pocas cosas en un vehículo alquilado”, relató.

Eneida Charupá no pudo dormir toda la noche del 11 de septiembre impresionada con la violencia, y esperó las primeras luces del día siguiente para ir a ver qué más pasó en la sede de su organización. “Volví en la madrugada del día 12. Entré y vi todo destrozado. Fue como que si el mundo se hubiese acabado, como si hubiese perdido un hijo, porque uno se encariña con su organización. Me sentí impotente como dirigente, al no haber podido evitar todo lo que pasó, pero también era consciente de que estaba en riesgo nuestras vidas...”, contó.

Eneida llamó por teléfono uno por uno a los demás dirigentes. “La verdad, fue algo muy triste. Todos nos quedamos mudos, sin palabras, al ver todo destruido. Son momentos que uno jamás va a olvidar, ¿no? Pero nos tocó vivirlos”, cuenta mientras se le quiebra la voz.

La cámara filmadora de la CPESC captó el momento en que ingresó al predio destruido el presidente de la organización, Diego Faldín, indígena chiquitano que no pudo contener las lágrimas cuando el comunicador de la organización le pidió que envíe un mensaje para tranquilizar a los indígenas de las comunidades. Comenzó enumerando los daños y terminó con la voz entrecortada: “...han dañado nuestros intereses. Esto nos costó construir durante más de doce años y en menos de cinco minutos lo han destruido...”, dijo y se ahogó en sus palabras y luego se abrazó con el comunicador que intentaba entrevistarlo.

Según relata Eneida Charupá, ese mismo día fueron a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) a presentar la denuncia para que la Policía y el Ministerio Público investiguen y sancionen a los autores: “En la Policía nos dijeron que no había personal desocupado para hacer la investigación”.

La denuncia ante la Policía tiene el código FELCC-SCZ0808296, que fue presentada el 12 de septiembre de 2010, donde se acusa a un grupo de personas por varios delitos, entre ellos el robo, incendio, asociación delictuosa, daño a la propiedad y otros. Los denunciados son Fernando Chiqueno, Amalio Siye, Antonio Surubí, Jorge Picanerai y Diana Chiqueno. Se inició una investigación, según se pudo constatar en un informe policial del 17 de septiembre del mismo año, pero nunca fue concluida. Se realizó una sola visita policial al escenario del hecho, y se desconoce con precisión cuáles han sido los resultados y la participación del Ministerio Público.

Uno de los acusados, Antonio Surubí, quien actualmente es director de Pueblos Indígenas de la Gobernación de Santa Cruz (ex Prefectura), negó los cargos en su contra. “Es todo mentira. Nosotros fuimos a defender la CIDOB y luego nos pasamos a ver qué sucedía en la CPESC. Pero no participamos en nada. Solo miramos”, aseveró el indígena.

“Vimos que ingresó un grupo de 50 personas a la CPESC forzando uno de los portones. No sabemos quiénes eran. Seguramente fueron grupos organizados, pero no los identificamos. Estos muchachos se llevaron cositas que no eran mucho”, dijo Surubí.

Bolivia estaba al borde de la contienda interna

Bolivia vive un proceso político y social intenso desde principios de siglo XXI. A partir de la caída del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en octubre de 2003, como consecuencia de un alzamiento popular, el país no ha cesado en un proceso histórico en el que se intenta dar a luz un nuevo Estado y donde los protagonistas no han sido, precisamente, los partidos políticos, sino los movimientos sociales populares, rurales –sobre todo– y urbano populares, versus organizaciones que representan a la burguesía de las regiones más prósperas económicamente en esta nación.

En septiembre de 2008 fue el momento preciso en que se midieron las fuerzas de estos actores. La pulzeta derramó la sangre de al menos una docena de bolivianos que perecieron acribillados, “cazados” en la ribera de un río, en Cobija-Pando, tierra recóndita que forma parte de la Amazonia que comparte Bolivia con Brasil.

Un video, cuya autenticidad ha sido comprobada por peritos de organismos internacionales, testifica esta matanza acaecida el 11 de septiembre de ese año. Además de informes de la Unasur, de la ONU y del Defensor del Pueblo de Bolivia, entre otros organismos e instituciones que investigaron el suceso.

La escalada de violencia comenzó en agosto, al día siguiente que el país ratificó en las urnas al Presidente Evo Morales y al Vicepresidente Álvaro García Linera con un 67,4%. De los nueve departamentos que tiene Bolivia, seis respaldaron el gobierno de Morales y tres lo rechazaron; éstos últimos estaban liderados por activistas de organizaciones cívicas y empresariales, a los que se le unieron políticos cuyos partidos desaparecieron en la crisis de las organizaciones partidistas.

A mediados de agosto, la situación de conflictividad se fue acentuando. En las 3 regiones de oposición, sus líderes –elegidos y ratificados en el referéndum de agosto– tomaron la decisión de implementar sus modelos autonómicos que no estaban reconocidos por la anterior Constitución Política del Estado. En esos momentos, estaba en curso un referéndum para ratificar o rechazar el texto de la nueva Constitución, donde recién se incorporaba un modelo de autonomías, pero que era contrario a los intereses de los grupos de poder. La oposición al gobierno del MAS sabía que, después de referéndum Revocatorio de agosto, la nueva Constitución tenía las de ganar, por eso se apresuró a poner en vigencia la autonomía que sólo ganó en sus regiones, no así en el resto del país.

La élite y las autoridades cruceñas, lideradas por el Comité pro Santa Cruz, y con el financiamiento del empresariado más pudiente del país, comenzaron asumiendo medidas radicales, incluso sacrificando sus propios intereses. En agosto, intentaron “tomar” el edificio de la Policía departamental, utilizando a un grupo de activistas discapacitados cuya demanda era que el Estado les conceda un bono por la discapacidad. En septiembre decretaron paralizar actividades, bloquear carreteras y movilizar a la sociedad civil. En ese afán, incorporaron “grupos de choque” que terminaron profundizando el conflicto e intensificaron el clima de violencia, según reportes de organismos internacionales.

Los liderazgos que condujeron este periodo violento posicionaron el discurso que la incursión a instituciones públicas era en pro de la autonomía. A estos ingresos violentos se le denominó “toma” de entidades públicas, las que estuvieron mezcladas con hechos delictivos, saqueo, robo y destrozos de bienes del Estado.

La escalada de violencia fue liderada por representantes de Santa Cruz y se registró de forma paralela y con características similares en Pando, Tarija y Beni, cuatro regiones que conformaron un bloque político autodenominado “Consejo Nacional Democrático (Conalde)”.

La matanza en Pando

No fue un enfrentamiento como, insistentemente, quiso hacer creer el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, el principal acusado de la muerte de una docena de campesinos y estudiantes de una escuela normal. Fernández encontró eco en la mayoría de los medios de comunicación bolivianos, de línea opositora al Gobierno nacional, que replicaron su discurso que quedó en el imaginario de la población.

El informe final de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia estableció que el suceso del 11 de septiembre de 2008 en Pando fue una masacre. “La masacre de los campesinos y normalistas habría sido cometida por funcionarios de la Prefectura, del Sedcam (Servicio de Caminos de la Prefectura de Pando), miembros del Comité Cívico y otros partidarios de la Prefectura de Pando”, dice una de las partes sobresalientes del informe de este organismo internacional.

Después de dos años Bolivia no sabe cómo realmente sucedieron los hechos en este caso y cuántas personas murieron exactamente. Los medios de comunicación se encargaron de contar historias de forma distinta y contrapuesta de un mismo suceso. Un día la prensa exhibía a los campesinos acribillados como víctimas de una matanza

difundiendo videos que registraron los ataques, pero al día siguiente se ponía en duda la originalidad de las imágenes y transformaban a las víctimas en victimarios.

El Estado boliviano, a través del sistema judicial, tampoco ha prosperado en la investigación. Actualmente se tiene preso al principal acusado, Leopoldo Fernández, y a otros ciudadanos presuntamente involucrados, pero aún sin sentencia. Las investigaciones son muy tardías, hecho que prolonga el sentimiento de impunidad en las familias de los fallecidos, así como en aquellos que están detenidos por casi dos años, acusados de ser los responsables del suceso, pero todavía sin sentencia.

¿Indígenas contra indígenas?

“Han utilizado a hermanos nuestros para destruir la CPESC. Estos hermanos han saqueado sus propias pertenencias, su patrimonio, el patrimonio de los pueblos (que forman parte de la organización)”, dijo Ramiro Galindo, secretario de Tierra y Territorio de la CPESC, al referirse a un tema que afecta no solo al movimiento indígena boliviano, sino a la mayoría de las organizaciones sociales: el paralelismo.

Alrededor de una decena de ex líderes indígenas encabezaron las agresiones a las dos sedes de los originarios en Santa Cruz. La denuncia ante la FELCC, interpuesta por el presidente de la CPESC, es en contra de Fernando Chiqueno, Amalio Siye, Jorge Picaneai, Diana Chiqueno, Carmelo Justiniano y Antonio Surubí. La mayoría ha sido dirigente de sus organizaciones, algunos con vasta trayectoria en la dirigencia, pero también la mayoría ha salido de las mismas con cuestionamientos por problemas administrativos.

Algunos de ellos han conformado organizaciones paralelas, sin sustento de bases en sus comunidades, las mismas que han aparecido en determinadas coyunturas de conflictividad y han desaparecido igualmente.

Antonio Surubí, uno de los acusados de haber propiciado el ingreso violento y la destrucción de la CPESC, asegura que todo es una difamación contra su persona y los demás citados en la demanda. “Han hallado un bonito pretexto para sepultarnos y tildarnos de traicioneros del movimiento indígena”, afirma en su defensa.

La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) es la organización matriz que aglutina a 34 pueblos étnicos de los 36 que tiene el país y que están mencionados en la actual Constitución Política del Estado. Mientras que la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) nació agrupando a los cinco pueblos indígenas de este departamento, sin embargo, actualmente congrega a cuatro: Guarayos, Chiquitanos, Yuracaré-Mojeño y Ayoreos.

Lo racial y lo político

El año 2004, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) hizo una encuesta para medir la intolerancia política en Bolivia. Los resultados establecieron altos índices de discriminación política contra el indígena, hecho que se visibilizó de forma explícita a partir de 2006 y alcanzó su pico máximo en 2008.

En aquella oportunidad, el PNUD consultó: “¿Estaría de acuerdo con que un indígena llegue a la Presidencia de Bolivia en el año 2025?” Por nivel socioeconómico, los segmentos identificados como “pobre y pobre extremo” expresaron estar de acuerdo con que un indígena gobierne Bolivia en 2025. Segmentos “alto/medio alto y medio” manifestaron su oposición a tal posibilidad. Mientras que en el “altiplano urbano y en el altiplano rural” el apoyo a esta posibilidad fue contundente.

La historia cambió los cálculos de la misma encuesta. Bolivia no tuvo que esperar hasta el 2025 para tener un presidente indígena. Lo tuvo dos años después de realizada la consulta.

Esta intolerancia política advertida en 2004, llegó a su punto de inflexión entre 2007 y 2008.

Los líderes de sectores sociales populares, campesinos e indígenas, las instituciones que trabajan en la defensa de derechos humanos y líderes de opinión identificados con las causas sociales de estos segmentos, observan que la emancipación campesino-indígena en el control del poder político, ha sido un factor que motivó expresiones racistas provenientes de quienes se han visto desplazados de las estructuras del control del Estado, amplificadas por los medios de comunicación y, finalmente, internalizadas en una parte de la sociedad boliviana.

“Por ser el Presidente un indígena y por haber demostrado que un indígena, un campesino también puede llegar a ese nivel, a tener el mando del país, es que ahora estamos viviendo así. Desde ahí nace la rabia. Más racismo en contra de indígenas y campesinos, por tener un Presidente indígena. Desde entonces sentimos más discriminación. Pero no es por culpa del Presidente, sino de gente, que se siente mejor que nosotros y nos mira diferente”, expresó Dorys Domínguez, dirigente de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de Pando.

“Pensaron que un indio como Evo no iba a poder gobernar. Cuando ganó las elecciones decían: ‘se va a caer en un mes, este cholo no nos puede gobernar, ¿cómo va a manejar (el país)?’”, expresó Felix Crispín Choquecallata, un boliviano de origen quechua que participó de un conversatorio sobre la problemática del racismo en Bolivia.

El director del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales (CEJIS), Leonardo Tamburini, sostiene que la emergencia de campesinos e indígenas en el control del Estado boliviano ha provocado reacciones radicales, violentas y de racismo contra

los protagonistas que son los movimientos populares. “La pérdida del poder de los sectores dominantes ocasionó un rebrote de actos de discriminación racial contra los campesinos e indígenas. Los sectores de poder han reaccionado fuertemente para hacerlos avergonzar de su origen racial, de su adscripción política y sobre todo para amedrentarlos a través de este tipo de mecanismos”, señaló Tamburini.

Miriam Suárez, directora de la Casa de la Mujer y representante de la Coordinadora de Derechos Humanos de Santa Cruz comparte criterios con Tamburini. “Frente a la emergencia de los sectores que permanecieron históricamente excluidos, los grupos dominantes del pasado, que tenían adormilado el racismo, ahora han dicho ¡no!, los sirvientes, los peones, los nadie, los miserables, no nos van a mandar; si toda la vida hemos sido nosotros los mandamás”, comentó.

El ex secretario de Justicia de la ex Prefectura de Santa Cruz (ahora Gobernación), Vladimir Peña, considera que los ataques a las sedes indígenas cruceñas no son expresiones racistas. Cree que se trata de hechos de violencia política. “En algunos informes oficiales de algunas entidades de derechos humanos, nacionales y extranjeras, se ha tomado como racismo a estos sucesos que, para nosotros, son derivados de la confrontación política”, señaló.

La senadora de oposición Centa Rek, fundadora de Human Rights Foundation-Bolivia, institución que existió entre 2007 y 2008, cuestiona los informes de instituciones públicas y privadas que advierten el surgimiento de expresiones racistas en determinadas coyunturas políticas en Bolivia. “Esas investigaciones están contaminadas. Han confundido el fenómeno político con el fenómeno sociológico, étnico-cultural de Bolivia”, afirmó.

“La poderosa CPESC”

La CPESC tuvo una convocatoria inédita en la historia de los movimientos sociales de tierras bajas de Bolivia. Según una investigación auspiciada por el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), la CPESC propició la creación del Bloque Oriente, una alianza de organizaciones sociales rurales, campesinas e indígenas, del oriente boliviano que, en el proceso constituyente, fue la base para la conformación del Pacto de Unidad, que fue otra alianza que aglutinó a todas las organizaciones sociales populares, sobre todo rurales, de Bolivia. El Bloque Oriente fue el único movimiento que consensuó y redactó una propuesta de Constitución Política del Estado, documento que terminó siendo la base de la Carta Magna que aprobó la Asamblea Constituyente boliviana en el año 2007.

Para el director de Cipca, Eulogio Núñez, el asalto y saqueo de la CPESC tenía un fin: destruir el movimiento indígena del oriente porque había sido el promotor de demandas históricas pero contradictorias con los intereses de los grupos de poder

económico y político de Santa Cruz. “La CPESC estaba en la mira de las élites del poder local y toda la furia fue a desembocar en ella el 11 de septiembre. Prácticamente quedaron solo los muros de aquel centro de encuentro, de debates, de elaboración de leyes, de decretos, de normas que transformaron el país. Quedó destruida”, recuerda.

En la CPESC se planificó la marcha indígena que el año 2002 exigió a los gobernantes la realización de una Asamblea Constituyente. Desde ahí partió la caminata hasta que consiguió que la clase política, de oficialismo y oposición, se comprometiera a convocar una asamblea constituyente que recién llegó en 2006.

Asimismo, gran parte de la normativa sobre la posesión y disposición de la tierra rural fue redactada en esa sede indígena, además de la legislación vinculada a la distribución de recursos provenientes del comercio de hidrocarburos de Bolivia. “En la CPESC también se redactaron pedazos de la Constitución Política vigente”, rememoró Eulogio Núñez.

Eneida Charupá no olvida el momento en que uno de los indígenas que lideró el brusco ingreso a la CPESC se refirió en tono irónico a la fortaleza de esta organización: “El compañero Ignacio Urapuca se paró en la puerta de salida, se volcó y gritó: ‘¿Dónde está la poderosa CPESC, que un día tuvo poder? Ahora que se defienda’; lo dijo en son de burla”.

En menos de dos años, los indígenas han logrado reconstruir su sede. El programa del Gobierno denominado “Evo Cumple”, les otorgó \$us 142.000 que han sido invertidos en la nueva edificación de la CPESC. “Eran recursos que el Presidente nos había comprometido antes de que suceda la destrucción”, aseguró Charupá.

Sin embargo, para el director de Cipca, cuya institución trabaja estrechamente con este movimiento indígena, el suceso del 11 de septiembre en la CPESC ha dejado secuelas y advierte riesgos del debilitamiento de la alianza que habían logrado consolidar hasta 2008. “La alianza del Bloque Oriente quedó un poco débil desde la invasión a la CPESC. Han logrado afectar, porque el Bloque Oriente no sabía donde reunirse después del destroz. Ésa era la sede oficial, porque la CPESC coordinaba al Bloque y ese golpe afectó”, sostiene Núñez.

Los indígenas tienen otra visión del desenlace. “El movimiento indígena no es sólo la infraestructura. No son las paredes, los techos, las ventanas. Somos las personas, lo que llevamos dentro. Es nuestra ideología, nuestra lucha que sigue firme”, reflexionó el dirigente Ramiro Galindo.

La invisible destrucción de la CPESC

La destrucción de la CPESC pasó desapercibida en los medios de comunicación. La mayoría no hizo cobertura del ataque, mientras que otros publicaron de forma distorsionada el hecho.

El periódico de mayor tiraje en Bolivia, *El Deber*, publicó la noticia relacionada al ingreso brusco a la CPESC y a la CIDOB dentro de una información que se refería a más de veinte incursiones violentas durante tres días; los hechos registrados en la CPESC y CIDOB fueron mencionados en tres párrafos. Uno de los párrafos menciona el caso y lo califica de “violento”; el otro cita la denuncia de un dirigente de la CIDOB que acusa el saqueo por parte de jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista encabezados por ex líderes indígenas; mientras que el tercer párrafo es el desmentido de uno de los acusados. Este diario no publicó ninguna fotografía del caso.

El periódico *El Nuevo Día*, le dedicó mayor espacio, pero afirmó que la “toma” de la CIDOB y la CPESC fue “pacífica”. Asimismo, el enfoque noticioso no era precisamente el ingreso a estas dos sedes indígenas, sino otro resumido en su titular: “indígenas recuperan su sede después de dos años”, cuyo cuerpo noticioso es confuso y pretende reivindicar la acción que hizo el grupo de ex líderes indígenas que encabezaron estos ingresos violentos.

Diez días después y ante las gestiones que hicieron instituciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos en Santa Cruz, *El Deber* volvió a publicar una nota corta, con una fotografía que mostraba los destrozos en la CPESC.

Para el director de *radio Santa Cruz* en Bolivia, Carlos Salazar, la cobertura noticiosa de todas las jornadas violentas de agosto y septiembre de 2008 estuvieron planificadas y dirigidas. “Mostraban las tomas como un hecho positivo, de protesta social, con connotación positiva. Imagino que había asesoría comunicacional de expertos en imágenes. Incluso recuerdo un caso, en un canal de televisión que no editó su material y en él se escuchó la protesta de uno de los jóvenes que con violencia ingresó a una institución pública y al ser filmado reclamó a los camarógrafos: ‘acordamos que no nos filmarían la cara’”, rememoró el periodista.

Hernán Cabrera, dirigente de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz en ese entonces, coincide con Salazar en su balance: “La cobertura de la prensa fue de complicidad con toda la estructura institucional y política de Santa Cruz, para dar a entender que las ‘tomas’ fueron actos legítimos, de rabia del pueblo”.

Ambos comunicadores también concuerdan que la agresión a la CPESC fue invisibilizada en la mayoría de las agendas de los medios de comunicación de Santa Cruz y de Bolivia.

La indígena Eneida Charupá no se explica por qué la prensa no hizo cobertura de este suceso: “Nosotros hicimos una conferencia de prensa, la prensa vino, pero luego ellos no reflejaban lo que nosotros dijimos en esa ocasión y posteriormente. No entiendo por qué. Tal vez sea porque no querían que se identifiquen los nombres y los rostros de quienes ingresaron a nuestra sede”, afirmó.

El comunicador de la CPESC, Rolando Bueno, tiene una idea clara acerca de lo que se ha perdido producto del ataque a esta organización. “Contábamos con un

archivo audiovisual que estaba todavía plasmado en casetes de VHS, era enorme, porque reflejaba todas las movilizaciones, los eventos orgánicos de la CPESC; ese archivo fue quemado, no se pudo recuperar, se perdió para siempre esa información. Estamos rescatando algo de data reciente, pero lo antiguo, lo histórico, desapareció”.

Para la responsable de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Cruceñas (CDBC), especializadas en Ciencias Sociales, Biológicas e Históricas, Rosario Vargas, la pérdida documental sufrida por la CPESC es invaluable. “Se ha quemado la historia de este movimiento social. Eso no se recuperará nunca”, precisó. Esta institución hizo un levantamiento de información sobre el daño ocasionado a centros de documentación, bibliotecas, entre otros, durante los hechos violentos de septiembre de 2008.

Tendencia a la concentración de los medios y sus contenidos

El espectro mediático en Bolivia es demasiado grande para los 9,5 millones de habitantes que tiene el país. Un informe publicado por el Observatorio Político Nacional de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, afirma que existen 194 canales de televisión, de los cuales la tercera parte está en las nueve capitales de departamentos y el resto en zonas rurales. Aparte, se han contabilizado más de 200 repetidoras de televisión.

Esta misma publicación señala que el modelo de la propiedad de medios en Bolivia está sustentado en el modelo globalizador de creación de redes nacionales. La tendencia es la concentración de medios en manos de pocos empresarios, prueba de ello es que la red más grande de periódicos del país, denominada Grupo Líder, está integrada por 12 diarios impresos liderados por *El Deber*.

El Grupo Líder, de la familia Rivero Jordán de Santa Cruz, está compuesto por 12 diarios: *Los Tiempos*, *El Deber*, *El Alteño*, *El Potosí*, *Nuevo Sur*, *El Chaqueño*, *El Norte*, *La Prensa*, *Correo del Sur*, *La Palabra*, *Gente* y *La Patria*.

El Observatorio de Medios (Onadem) de la Fundación UNIR Bolivia, comprobó que los diarios que conforman esta red compartieron no sólo las noticias en determinadas coyunturas informativas sino también los editoriales, a pesar de que –teóricamente– el editorial es la personalidad de un solo medio de comunicación.

Las redes de televisión más grandes que hay son de propiedad de empresarios que están ligados a intereses de la tierra y la explotación de sus recursos. Por ejemplo, los propietarios de las redes Unitel y UNO se dedican a la ganadería en gran escala.

La televisión del Estado boliviano no se ha quedado atrás. Esta red televisiva, que tiene presencia en casi todo el territorio nacional, ha recibido inversiones fiscales

millonarias. Sólo en 2008, el soporte del Estado fue de más de 7,5 millones de dólares (Bs 53,3 millones); y, en 2009, recibió más de 2,3 millones de dólares americanos (Bs 16,4 millones).

Los contenidos mediáticos están en tela de juicio en esta coyuntura histórica boliviana. Investigaciones de instituciones nacionales e incluso de organismos internacionales han puesto en entredicho el rol que han cumplido los medios de comunicación en Bolivia, tanto los privados como los del Estado, debido al sesgo de sus tratamientos informativos acerca de la actividad política.

En Santa Cruz, las organizaciones indígenas resultan ser protagonistas noticiosas únicamente cuando realizan movilizaciones (marchas, manifestaciones, etc.) o cuando anuncian o ejecutan medidas de presión. Esta forma de plantear informativamente el tema indígena motiva la redacción de editoriales cuestionadores de las expresiones de las organizaciones que aglutinan a los pueblos étnicos y de sus enunciados de protesta o presión. En la mayoría de los casos, se los incorpora en las noticias y editoriales de forma estigmatizadora, mostrándolos como ciudadanos conflictivos, problemáticos e inconformes con el resto de la sociedad, según una investigación científica que analizó noticias y editoriales de dos periódicos cruceños.

Un movimiento hostigado, a pesar de ser pacifista

Desde finales del siglo XX, los indígenas de tierras bajas (oriente y amazonia) de Bolivia, decidieron cambiar su estrategia de sobrevivencia que hasta entonces estaba sustentada en el autoconfinamiento en las espesuras de las selvas. A partir de los años 80, optaron por visibilizarse e interpelar al Estado nacional y a la misma sociedad para que les reconozcan su pertenencia a Bolivia y les respeten sus derechos.

Sus formas de manifestación social, de protesta, son pacíficas y no buscan afectar los derechos ni los intereses de los no indígenas. Así lo demuestran todas y cada una de las siete marchas indígenas que ellos protagonizaron desde 1990 para exigir el reconocimiento de sus derechos, sobre todo a sus territorios.

A diferencia de otros movimientos sociales –como el campesino, el productor de coca, el de colonizadores, entre otros– los indígenas del oriente y la amazonia no han practicado nunca bloqueos de carreteras, ni asumen la huelga de hambre como medida de presión.

Su estrategia ha sido la sensibilización de la sociedad a través del sacrificio propio. Por eso la medida de presión ha sido siempre la marcha, la caminata desde sus comunidades hacia la sede de Gobierno (La Paz) acompañados de sus familias completas. Caminatas extenuantes y riesgosas que algunas ocasiones han durado más de un mes hasta sensibilizar a los gobernantes para que escuchen sus reclamos. Así

es como han conseguido todas y cada una de las leyes, decretos supremos, derechos en la nueva Constitución Política del Estado y, finalmente, la consolidación de las autonomías indígenas en el proceso descentralizador que vive el país.

Conclusiones

En el mundo indígena boliviano, sobre todo en las denominadas tierras bajas, las de oriente y de la amazonia, sus formas de protesta han sido peculiares, pacíficas y sacrificadas. Sin embargo, tanto el Estado boliviano representado por los diferentes poderes, como la misma sociedad, no han interpretado estas luchas socioeconómicas en su real dimensión. Más bien las han estigmatizado.

Los medios de comunicación han interpretado en desmedro de estas formas de protestas y de sus actores.

La coyuntura política histórica que vive Bolivia, con la emancipación de las clases populares, sobre todo las rurales y con mucho hincapié las indígenas, ha exacerbado sentimientos de racismo, en muchos casos extremos, como el hecho registrado en Pando, con la matanza de alrededor de veinte campesinos y los destrozos de las oficinas de las organizaciones indígenas de mayor representatividad (CIDOB) de Bolivia y de Santa Cruz (CPESC).

Santa Cruz, 30 de septiembre de 2010

Fuentes de información

Entrevistas

1. Blesneida Coimbra Roca, indígena del pueblo tacana, secretaria de la CPESC desde antes de 2008.
2. Eneida Charupá Arroyo, indígena chiquitana, responsable de Género de la CPESC. Es una lidereza que sobresale dentro del movimiento indígena del oriente boliviano.
3. Lázaro Tacoo, indígena chiquitano que, en septiembre de 2008, era secretario de Fortalecimiento Organizativo de la CPESC.
4. María Sarabia, indígena tacana, responsable de Comunicación de la CIDOB.
5. Eulogio Núñez, agrónomo y abogado, es director del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) en Santa Cruz.
6. Mercedes Noza, socióloga indígena, estudiosa de las culturas indígenas del oriente de Bolivia

7. Antonio Surubí, director de Pueblos Indígenas de la Gobernación de Santa Cruz.
8. Hernán Cabrera, periodista, ex secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz.
9. Carlos Salazar, periodista, director de la radio Santa Cruz.
10. Rolando Bueno, comunicador social de la CPESC.
11. Ramiro Galindo, secretario de Tierra y Territorio de la CPESC.
12. Dorys Domínguez, dirigente de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de Pando.
13. Palabras de Félix Crispín Choquecallata, estudiante de Posgrado de la Universidad Amazónica de Pando, en un conversatorio sobre racismo.
14. Leonardo Tamburini, abogado, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).
15. Miriam Suárez, directora de Casa de la Mujer Santa Cruz.
16. Rosario Vargas, representante de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Cruceñas (CDBC).

Hemeroteca

1. Archivos del periódico El Deber de Santa Cruz, del 15 de agosto al 30 de septiembre de 2008.
2. Archivos del periódico El Nuevo Día de Santa Cruz, del 15 de agosto al 30 de septiembre de 2008.

Audiovisuales

1. Video "Nacimos libres, moriremos libres, la lucha continúa" producido por la unidad de Comunicación de la CPESC.
2. Archivos audiovisuales de los sucesos de septiembre de 2008 de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Cruceñas (CDBC).
3. Archivos audiovisuales del archivo de la CIDOB.

Otros documentos

Informe de Desarrollo Humano de Bolivia 2004, editado y publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Sistematización del proceso de organización del Bloque Oriente. Trabajo publicado por CIPCA y dirigido por Gisela López Rivas.

Copia de la denuncia presentada por Diego Faldín a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen,

del 12 de septiembre de 2008.

Copia de un informe policial No. 8296/08, del 17 de septiembre de 2008, donde un policía investigador detalla haber iniciado el trabajo de investigación del suceso.

Sondeo exploratorio sobre el racismo en el oriente boliviano. Trabajo realizado por Gisela López Rivas para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia.

Artículos de opinión difundidos a través de correos electrónicos que denunciaron el caso.